

# COSTA RICA COVIDIANA

Pandemia politizada y desmantelamiento  
republicano

Iván Molina Jiménez







# Costa Rica covidiana



# Costa Rica covidiana

Pandemia politizada y desmantelamiento  
republicano

Iván Molina Jiménez



Primera edición: 2021

© Del Pasado y del Presente

© Iván Molina Jiménez

San José, Costa Rica

Ilustraciones de portada y contraportada: fotografías propiedad del autor.

# Índice

Prólogo	
Momento decisivo.....	9
Capítulo 1	
Costa Rica precovidiana.....	11
Capítulo 2	
Primera ola.....	19
Capítulo 3	
Segunda ola.....	25
Epílogo	
Distanciamiento histórico.....	33
Referencias.....	35



## Prólogo

### Momento decisivo

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ocurrió en un momento decisivo de la historia costarricense. Desde el 2018, un gobierno dominado por los sectores oligárquicos empezó a impulsar reformas profundamente regresivas en términos fiscales, sociales e institucionales. En vez de detener ese proceso, la pandemia lo profundizó, ya que las medidas implementadas para detener la propagación de la enfermedad limitaron o neutralizaron simultáneamente la capacidad de movilización de sindicatos, partidos políticos de izquierda, asociaciones estudiantiles y otras organizaciones similares. Rápidamente, las autoridades aprovecharon esa ventaja estratégica para intensificar sus políticas favorables a los grandes empresarios, a costa de los trabajadores y de las clases medias.

Para contextualizar apropiadamente por qué Costa Rica empezó a perder su liderazgo como uno de los países más progresistas de América Latina, el presente estudio considera brevemente los estilos de desarrollo predominantes de 1950 al 2018, y las modificaciones en el escenario político que posibilitaron la construcción de un nicho de poder oligárquico en ese último año. De seguido, se analiza cómo la primera ola de Covid-19, que se extendió entre marzo y mayo del 2020, fue producto del interés del

gobierno por frenar su creciente impopularidad y capitalizar políticamente la lucha contra la pandemia: convocó a un esfuerzo nacional para contenerla mediante la implementación de estrictas medidas sanitarias.

Finalmente, se explica por qué, una vez que esa contención demostró ser insostenible por los costos implicados en términos del deterioro económico y el incremento del desempleo, el gobierno empezó a flexibilizar la política sanitaria. De junio del 2020 a febrero del 2021, a medida que se responsabilizaba a la población de velar por su propia salud, el país experimentó una segunda ola de contagios. Al mantener neutralizada la protesta social, la expansión del Covid-19 fue aprovechada por las autoridades para impulsar nuevas iniciativas que, a la vez que protegen los intereses oligárquicos, elevan la carga fiscal de las clases trabajadoras y de los sectores medios, precarizan sus condiciones laborales y reducen sus salarios.

# Capítulo 1

## Costa Rica precovidiana

De 1950 a 1980, Costa Rica experimentó una importante modernización de la producción agrícola (especialmente en los casos del café y el banano, los principales productos de exportación), una industrialización sustitutiva de importaciones y un crecimiento sin precedente del mercado interno (Rovira, 1982, 1987). Simultáneamente, las políticas sociales se expandieron, con lo que mejoraron las condiciones de vida de la población, que ascendió de 917.649 a 2.249.618 habitantes entre 1951 y 1979 (Pérez, 2010). Entre esos mismos años, la proporción de niños de 7 a 12 años que asistía a la escuela se elevó de 84,8 a 99,1 por ciento, la de jóvenes de 13 a 17 años matriculados en los colegios subió de 9,9 a 62,1 por ciento, y la de las personas de 18 a 24 años inscritas en las universidades se incrementó de 1,4 a 14,5 por ciento (Molina, 2017). Además, la participación de los hogares pobres se redujo de 51 a 25 por ciento de 1961 a 1977 (Céspedes y Jiménez, 1995).

El responsable de esa transformación del país fue el Partido Liberación Nacional (PLN), fundado en 1951 por intelectuales, pequeños y medianos empresarios y profesionales. Identificado con la socialdemocracia, el PLN se valió de su control del Estado (y, en particular, de la banca nacionalizada) para diversificar la economía, abrir nuevas fuentes de acumulación de capital y disminuir la influencia tanto

de la vieja oligarquía, que dominaba el procesamiento y la exportación del café, como de la United Fruit Company, que controlaba la actividad bananera. Al promover una mejor distribución de los ingresos, mediante salarios crecientes y la creación de cooperativas, el PLN incentivó procesos de movilidad social ascendente y consolidó una estratégica clientela electoral, conformada por las clases medias (Rovira, 1982).

Si el apoyo al cooperativismo en el sector agrícola permitió al PLN reducir la influencia de la oligarquía cafetalera en las áreas rurales (Gudmundson, 2018), su política de favorecer la organización de los empleados públicos creó sindicatos anticomunistas para contrarrestar al sindicalismo de izquierda, particularmente fuerte entre los trabajadores bananeros y algunos sectores de obreros urbanos (Aguilar, 1989). El liderazgo político del PLN se evidenció en que, pese a ser afectado por diversos escándalos de corrupción y a que fue sistemáticamente acusado de simpatizar con el comunismo internacional, ganó cuatro de las siete elecciones presidenciales realizadas en el país entre 1953 y 1978, período durante el cual también obtuvo mayoría legislativa (Oconitrillo, 2004).

Al finalizar la década de 1970, el estilo de desarrollo promovido por el PLN comenzó a agotarse como resultado de tres procesos distintos, pero entrelazados: el incremento en el gasto público, como resultado de la expansión de los servicios estatales (especialmente en educación y salud); la disminución de los precios internacionales de los productos agrícolas de exportación, que coincidió con el aumento en el costo del petróleo; y la persistencia de un sistema fiscal altamente dependiente de los impuestos indirectos (Rovira, 1987). Dado que no era políticamente viable controlar el incumplimiento tributario ni desconocer los

extraordinarios beneficios concedidos a las empresas industriales (en las que el capital extranjero tenía fuerte participación), los gobiernos del PLN recurrieron al endeudamiento externo, que ascendió de 164 a 1.479 millones de dólares entre 1970 y 1979, en una época en que las tasas de interés comenzaban a elevarse (Sobrado y Gutiérrez, 1982).

En 1980, Costa Rica se abismó en una profunda crisis económica, cuyo costo político fue asumido por los sectores oligárquicos de oposición al PLN, que habían ganado las elecciones de 1978. Al distanciarse de esa debacle, el PLN maniobró exitosamente para retornar al poder en 1982 y triunfar nuevamente en 1986. Durante este período, el PLN convirtió al país en un aliado estratégico en la guerra no declarada de Estados Unidos a la Nicaragua sandinista, lo que le valió una extraordinaria ayuda financiera de parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). Mediante estos recursos, el PLN reformó la economía costarricense, al incentivar la exportación de productos no tradicionales a terceros mercados, promover el turismo, privatizar algunas actividades estatales y abrir otras a la competencia (Rovira, 1987; Clark, 2001). De 1997 en adelante, se desarrolló un sector de industrias extranjeras de alta tecnología y de equipo médico, liderado por Intel (Paus, 2005).

La puesta en práctica de la nueva política reformista del PLN fue facilitada porque, por vez primera desde la década de 1950, coincidía con las reivindicaciones de los sectores oligárquicos, opuestos a la expansión de los servicios estatales. También esa implementación fue favorecida porque los comunistas y otros partidos similares, al no poder capitalizar electoralmente la crisis de 1980, se desgastaron en prolongados y violentas disputas internas. Aunque la izquierda mantuvo una mínima participación legislativa, como resultado de esos conflictos, que se adelantaron por casi diez años al

colapso de la Unión Soviética (1991), perdió sus influyentes bases sindicales y estudiantiles. Adicionalmente, su activa participación en la esfera pública, lograda mediante sus propios periódicos, declinó primero y desapareció después (Salom, 1987; Salazar y Salazar, 2010; Cortés, 2018).

Rápidamente calificadas de neoliberales, las reformas impulsadas por el PLN, encontraron su principal aliado en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fundado en 1983 y convertido el más directo representante de los intereses oligárquicos (Salazar y Salazar, 2010). Simultáneamente, los empleados públicos y los pequeños y medianos productores urbanos y rurales, que antes de 1982 constituyeron una estratégica base de apoyo para el PLN, empezaron a rebelarse contra las nuevas políticas económicas, un proceso liderado por los sindicatos de trabajadores estatales (Donato y Rojas, 1987; Edelman, 1999). Sus protestas tuvieron un impacto profundo en el PLN, que se dividió en dos tendencias: una conformada por quienes permanecían identificados con la socialdemocracia y otra compuesta por los defensores del libre mercado (Sánchez, 2007).

Al final, y como ocurrió en otras democracias occidentales, los socialdemócratas fueron desplazados por los neoliberales, a medida que el comunismo dejaba de ser una amenaza a escala global y local. Para el PLN, esta reconversión ideológica tuvo un alto costo, dado que el PUSC ganó tres de las cuatro elecciones efectuadas en el período 1990-2002 (Oconitrillo, 2004). Más profundo todavía fue el impacto que ese cambio tuvo en el sistema político: la participación electoral se redujo de 81,1 a 70 por ciento entre 1994 y 1998 (Raventós, 2005). Tan abrupto descenso ocurrió a medida que las diferencias ideológicas entre el PLN y el PUSC tendían a borrarse, en un contexto donde disminuía o se estancaba la inversión social, se incrementaba la desigualdad en

la distribución del ingreso y se multiplicaban los escándalos de corrupción (Jiménez, Céspedes y Arce, 2006; González y Solís, 2001).

El desencanto y el descontento de la ciudadanía con el PLN y el PUSC incentivaron la formación de nuevas organizaciones políticas (algunas de carácter evangélico), de las cuales la más importante fue el Partido Acción Ciudadana (PAC). Fundado en el año 2000 por ex partidarios del PUSC y sobre todo del PLN, el PAC reivindicó la socialdemocracia como fundamento de su ideología, estrategia que casi le permitió ganar las elecciones del 2006 (Salazar y Salazar, 2010). Sin embargo, fue derrotado por el PLN que, con el propósito de recuperar sus bases electorales y neutralizar al PAC, combinó neoliberalismo económico con una reactivación de la inversión social y logró mantenerse en el poder en el 2010. Al igual que ocurrió en la década de 1970, esos dos períodos consecutivos del PLN mejoraron las condiciones de vida de la población (sobre todo las de los empleados públicos), pero estuvieron plagados de nuevos escándalos de corrupción, al tiempo que aumentaba el déficit fiscal (Programa Estado de la Nación, 2011, 2015).

Del desgaste electoral del PLN, se benefició directamente el PAC, que ganó las elecciones del 2014 y, en lo esencial, mantuvo el estilo de desarrollo liderado por el PLN desde el 2006 (Programa Estado de la Nación, 2019), al tiempo que establecía un acuerdo con los sindicatos del sector público para reducir al mínimo la conflictividad social (Alvarado y Martínez, 2019). Pese a la presión de los sectores oligárquicos para que el PAC impulsara una reforma que disminuyera el creciente déficit fiscal (5,9 por ciento del PIB en 2015), el primero gobierno del PAC se resistió a hacerlo y respondió en enero del 2016 con un cálculo de la evasión tributaria (8,2 por ciento del PIB), unos meses antes de que

estallara el escándalo global conocido como los Papeles de Panamá (Ministerio de Hacienda, 2016; *Semanario Universidad*, 2016). Al posponer la aprobación de nuevos impuestos (Borges, 2017), el PAC procuró trasladar el costo político de ese proceso a la nueva administración, presumiblemente presidida por el PLN, que asumiría funciones en el 2018

La decisión del PAC de postergar la reforma tributaria y de enfatizar la responsabilidad empresarial en el incremento del déficit fiscal desató las iras de los sectores oligárquicos que, afectados también por las revelaciones de los Papeles de Panamá (Viales y Vargas, 2020), intensificaron una virulenta campaña contra el sector público. Los principales medios de comunicación colectiva, propiedad de algunas de las corporaciones más poderosas del país se dedicaron, con base en casos seleccionados de sueldos o pensiones desproporcionados, a satanizar el Estado y a criminalizar a los empleados estatales. Mediante esta estrategia, sustrajeron de la atención pública no solo la evasión fiscal, sino los bajísimos salarios pagados por el sector privado: en 2014, el 27 por ciento de quienes laboraban en ese sector no devengaban siquiera el salario mínimo (Blanco, 2015; Programa Estado de la Nación, 2015; Molina, 2019).

Al desgaste producido por esa campaña, se sumó un escándalo de corrupción asociado con la importación de cemento chino, por lo que a finales del año 2017 parecía evidente que el PAC perdería las elecciones de febrero del 2018. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente en pocas semanas: la Iglesia católica y los cultos y partidos evangélicos posicionaron como tema electoral la protección de la familia tradicional y de la vida humana desde su concepción, en oposición a los reclamos de las comunidades sexualmente diversas y de las organizaciones feministas. La inserción de la religión en la política se consolidó después

de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la legalización del matrimonio igualitario (Pignataro y Treminio, 2019).

Inmediatamente, ese fallo impactó en el mercado electoral, puesto que el Partido Restauración Nacional (PRN), hasta entonces una minúscula organización de tipo evangélico, empezó a crecer en las encuestas. Frente a esta amenaza, el PLN y el PUSC adoptaron posiciones culturalmente conservadoras, que los acercaban al PRN, estrategia que los llevó a perder el apoyo de sus partidarios más progresistas, que prefirieron respaldar al PAC. Realizadas las elecciones el 4 de febrero del 2018, el PRN capturó 14 asientos de diputado y la mayoría de los votos para presidente, pero no los suficientes (40 por ciento) para adjudicarse la victoria, la cual se definiría en un balotaje con su seguidor inmediato (el PAC), a efectuarse en abril siguiente (Pignataro y Treminio, 2019).

Entre febrero y marzo del 2018, la competencia entre el PRN y el PAC adquirió todas las características de una guerra religiosa, que enfrentó a católicos y a evangélicos. Falto de experiencia política, el PRN rápidamente se expuso como una organización intolerante y adversa a los derechos humanos, lo que le impidió forjar una alianza con el PLN. En contraste, el PAC maniobró con éxito para firmar un pacto con el PUSC, capitalizó a su favor los múltiples errores del PRN y ganó ampliamente el balotaje realizado el primero de abril (Pignataro y Treminio). Como resultado de ese acuerdo, el PAC entregó los principales puestos relacionados con la gestión de la política económica a cuadros del PUSC.

Si el primer gobierno del PAC (2014-2018) mantuvo la socialdemocracia como fundamento parcial de la política pública, el segundo (2018-2022) se distanció completamente de ese enfoque. Al asumir el poder, los cuadros del PUSC implementaron una línea dura neoliberal, que

culminó en la más regresiva reforma fiscal experimentada por Costa Rica en toda su historia. Los tributos a las clases trabajadoras y los sectores medios fueron aumentados; en contraste, los grupos oligárquicos no solo fueron excluidos de contribuciones adicionales directas, sino que, mediante una amnistía, se les eximió del pago de unos 340 millones de dólares por concepto de multas e intereses por impuestos pendientes (Rodríguez y Morales, 2019; Alfaro, 2019a). Además, como parte de la reforma, se aprobó una regla fiscal que, con la excusa de controlar el gasto del Estado, limita fuertemente la inversión estatal, a la vez que viola la autonomía financiera del Poder Judicial, de los gobiernos locales y de diversas instituciones estratégicas para el desarrollo, como la Caja Costarricense de Seguro Social y las universidades públicas (Alfaro, 2019b).

Debido a que los sindicatos de empleados estatales tenían la expectativa de mantener con el segundo gobierno del PAC la relación privilegiada que tuvieron con el primero, fracasaron en identificar el nicho de poder neoliberal constituido por el PUSC, y en unirse para enfrentarlo. Consecuentemente, las movilizaciones organizadas a partir de septiembre del 2018, en las que tuvieron destacada participación los educadores de primaria y secundaria (en su mayoría mujeres), resultaron insuficientes para detener la reforma fiscal. Después de la derrota, la fracción legislativa del PLN impulsó un proyecto, convertido en ley a inicios del 2020 pese a nuevas manifestaciones en contra por parte de los trabajadores, que facilita la disolución de las organizaciones sindicales, limita fuertemente el derecho a huelga de los empleados públicos y criminaliza la protesta social (Muñoz, 2020a). Fue en este contexto de regresividad institucional y fiscal que se detectaron los primeros casos de Covid en Costa Rica.

## Capítulo 2

### Primera ola

Los dos primeros casos de Covid-19 en Costa Rica fueron detectados entre el 5 y el 7 de marzo del 2020, y correspondieron respectivamente a una turista proveniente de Nueva York y a un médico costarricense que acababa de regresar de Panamá (Ávalos, Lara y Recio, 2020; Rodríguez, 2020). A partir de ese momento, inició la primera ola de contagio que, como se observa en el Cuadro 1, se extendió hasta mayo. Durante estos meses, el promedio diario trimestral de nuevos infectados fue de 12,1 personas, de las cuales apenas el 2,7 por ciento fueron internadas en las unidades de cuidados intensivos y solo el 1 por ciento fallecieron. Al ubicarse como uno de los países del mundo con la mortalidad más baja, el logro costarricense pronto empezó a ser reconocido internacionalmente (CINDE, 2020).

Sin duda, ese éxito tuvo su origen en rápidas y estrictas políticas sanitarias. Desde inicios de febrero, el sistema de salud pública inició una campaña preventiva, dirigida a reducir el contacto físico, promover el frecuente lavado de manos, cubrirse con el antebrazo antes de estornudar, evitar tocarse la nariz y la boca, y practicar el distanciamiento social. Simultáneamente, se implementó la prueba de laboratorio para diagnosticar el Covid-19. Del 8 al 19 de marzo, después de ser detectados los primeros dos casos, la intervención del gobierno se intensificó: teletrabajo para

los empleados públicos que pudieran laborar desde el hogar, cierre de espacios públicos y de las fronteras internacionales (excepto a costarricenses o residentes), suspensión de todas las actividades escolares y de eventos masivos, y declaratoria de emergencia nacional (Gutiérrez y Gamarra, 2020; Chaves, 2020)

**Cuadro 1**  
Costa Rica: número de nuevas personas contagiadas, internadas en cuidados intensivos y fallecidas por mes y por promedio diario mensual (2020-2021)

Mes	Contagiados	Promedio	UCI	Promedio	Fallecidos	Promedio
Marzo, 2020	347	13,5	8	0,3	2	0,1
Abril, 2020	372	12,4	13	0,4	2	0,1
Mayo, 2020	337	10,9	7	0,2	4	0,1
Junio, 2020	2.403	80,1	13	0,4	6	0,2
Julio, 2020	14.361	463,3	96	3,1	134	4,3
Agosto, 2020	23.467	757,0	264	8,5	286	9,2
Septiembre, 2020	34.473	1.149,1	488	16,3	468	15,6
Octubre, 2020	34.211	1.103,6	336	10,8	481	15,5
Noviembre, 2020	29.667	988,9	307	10,2	341	11,4
Diciembre, 2020	29.683	957,5	349	11,3	459	14,8
Enero, 2021	24.959	805,1	341	11,0	442	14,3
Febrero, 2021	10.626	379,5	236	8,4	179	6,4
Marzo, 2021	12.440	401,3	280	9,0	159	5,1
Abril, 2021*	10.187	679,1	174	11,6	100	6,7
<b>Total</b>	<b>227533</b>	<b>560,4</b>	<b>2.912</b>	<b>7,2</b>	<b>3.063</b>	<b>7,5</b>

\*Al 15 de abril.

Fuente: Ministerio de Salud de Costa Rica.

Dada la cercanía de la Semana Santa, el gobierno aprovechó para ampliar las medidas de contención: del 23 de marzo al 12 de abril, limitó la circulación vehicular, redujo el horario de las actividades comerciales básicas (supermercados y farmacias) y clausuró las no esenciales, y cerró playas, parques nacionales e iglesias. Con pocas variaciones,

estas condiciones estuvieron vigentes durante el resto de abril. Las tres primeras fases de reapertura gradual de la economía se implementaron del 1 de mayo al 19 de junio y consistieron principalmente en ampliar las horas en que los vehículos podían circular y en que los negocios permanecerían abiertos. Sin embargo, el súbito incremento en los contagios, que supuso el inicio de la segunda ola, originó nuevas restricciones gubernamentales a partir del 20 de junio (Chaves 2020; Barboza, 2021).

Al considerar la respuesta inicial del gobierno a la pandemia, lo primero que se advierte es que, pese a que el número de casos detectados era muy bajo y estaban geográficamente concentrados en algunos cantones de la Gran Área Metropolitana (Barrantes y Solano, 2020), las medidas sanitarias implicaron casi un cierre de todo el territorio costarricense y se aplicaron aun en lugares sin personas infectadas o con pocos contagios. Dados los estragos que el Covid-19 producía por entonces en ciertos países europeos y en Estados Unidos, el proceder de las autoridades se explicaría por su interés en evitar que una situación similar ocurriera en Costa Rica, máxime que en Panamá la crisis sanitaria parecía estar fuera de control y no se conocía con exactitud lo que pasaba en Nicaragua (Ramos, 2020).

Tal explicación es correcta, pero insuficiente, dado que las drásticas medidas decretadas por el gobierno tuvieron un decisivo trasfondo político: impedir que una expansión descontrolada de los contagios incrementara todavía más su impopularidad, y capitalizar políticamente cualquier éxito logrado en la contención de la pandemia. El descontento con las autoridades tenía por fundamento la regresiva reforma fiscal del 2018: al afectar la capacidad de consumo de los sectores medios y de las clases trabajadoras, tuvo un profundo impacto recesivo en la economía (Núñez, 2020a),

cuyo crecimiento descendió de 3,4 por ciento del PIB en el 2017, a 2,7 por ciento en el 2018 y a 2,1 por ciento en el 2019 (Banco Central de Costa Rica, 2018, 2019). Simultáneamente, el desempleo, calculado al primer trimestre de cada año, ascendió de 10,3 por ciento en el 2018, a 11,3 por ciento en el 2019 y a 12,5 por ciento en el 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020).

Mucho antes de que el Covid-19 abatiera la economía costarricense, ya la reforma fiscal del 2018 lo había hecho, al contraer fuertemente el mercado interno. Si bien los sectores oligárquicos vinculados con la importación, la construcción y los bienes raíces fueron afectados por este proceso, los más perjudicados fueron los trabajadores por cuenta propia, los microempresarios y las pequeñas y medianas empresas (Núñez, 2020a). Al descontento de estos grupos, se sumó el de quienes perdieron sus empleos y el de los trabajadores públicos, doblemente derrotados en sus luchas contra los nuevos impuestos y contra la legislación antisindical. Según una encuesta efectuada en enero del 2020, el segundo gobierno del PAC fue el quinto peor evaluado en comparación con diez administraciones presidenciales previas (1978-2018) (CID/Gallup, 2020).

En el contexto de esa creciente impopularidad, el 17 de febrero del 2020 el Poder Ejecutivo (2020) publicó un decreto que creó la Unidad de Información Estadística de la Presidencia (UPAD), cuyo propósito era recopilar y analizar datos confidenciales de los ciudadanos para fortalecer la toma de decisiones de política pública. Inmediatamente, se produjo un repudio generalizado contra el gobierno, que culminó en una profunda crisis institucional: en la madrugada del 28 de febrero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó, por vez primera en la historia de Costa Rica, Casa Presidencial (Murillo, 2020a). Cuando el desprestigio de las

autoridades alcanzaba proporciones sin precedentes, se detectaron los dos primeros casos de Covid-19.

Decidido a no desaprovechar la oportunidad que se le presentaba, el gobierno, con el apoyo de los principales medios de comunicación, organizó la campaña contra la pandemia como un esfuerzo nacional, que apelaba al lema “quédate en casa”. Puesto que permanecer en el hogar dependía de poder realizar teletrabajo, esta opción estuvo al alcance principalmente de los sectores medios más calificados, no de las clases trabajadoras, que fueron las más contagiadas (Programa Estado de la Nación, 2020; Alvarado, 2020). Si esta estrategia fue exitosa en contener la propagación de la enfermedad, lo fue aún más en neutralizar a los sindicatos de empleados públicos, cuyas protestas, basadas en la movilización callejera masiva, tendieron a quedar reducidas a comunicados en redes sociales (Cortés y Sáenz, 2020).

Para compensar a los empresarios por el impacto de las medidas sanitarias, el gobierno promovió una reforma legislativa que les permitió reducir unilateralmente jornadas laborales y salarios (Álvarez, 2020; Díaz y Viales, 2020); además, fueron beneficiados con diversos alivios fiscales (Programa Estado de la Nación, 2020). Los sectores oligárquicos eludieron aportar al esfuerzo nacional, pese a que, de mayo en adelante, los grandes exportadores obtuvieron ganancias extraordinarias debido a la creciente devaluación del colón con respecto al dólar (Hidalgo, 2020). No satisfechos con todas esas ventajas y privilegios, los oligarcas intensificaron la campaña mediática para que las autoridades redujeran todavía más el gasto estatal, a costa de los empleados públicos, y transfirieran recursos adicionales al sector privado (Mora, 2020).

Lejos de atender esas demandas, que habrían profundizado la recesión económica y podrían haber provocado

un estallido social, el gobierno adoptó medidas compensatorias: docencia a distancia o virtual para impartir clases a los alumnos de escuelas y colegios estatales (una estrategia liderada por las universidades públicas) (Barquero, 2020) y un programa de subsidios monetarios (de 100 a 200 dólares por mes) durante tres meses para los trabajadores cesantes o afectados por la disminución de sus ingresos; a estos últimos, además, se les permitió retirar el Fondo de Capitalización Laboral (Artavia, 2020; Díaz, 2020a). Rápidamente, diversas instituciones estatales se sumaron con sus propias iniciativas a la guerra contra el Covid-19: acceso gratuito a Internet para los estudiantes, fabricación de respiradores artificiales de emergencia y desarrollo de tratamientos basados en el plasma de pacientes recuperados y en el suero equino (Rodríguez, 2020; Céspedes, 2020).

Según una encuesta realizada del 13 al 22 de abril del 2020, las evaluaciones favorables al gobierno ascendieron a 65 por ciento, un incremento de 43 puntos porcentuales en comparación con una medición similar efectuada en noviembre del 2019. En este ascenso, influyó decisivamente el éxito alcanzado en la contención de los contagios (Alfaro, 2020a). Al capitalizar políticamente este logro, las autoridades desactivaron la crisis institucional desatada por el escándalo de la UPAD. Paralelamente, y con un propósito político similar, incursionaron en el escenario global, al proponer a la Organización Mundial de la Salud la creación de un banco de datos gratuitos que facilitara fabricar pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos y vacunas (Abbas, 2020). De esta forma, una iniciativa socialista externa servía para desviar la atención de la línea dura neoliberal impulsada internamente.

## Capítulo 3

### Segunda ola

La exitosa contención de la pandemia, basada en cierres masivos de actividades económicas en todo el país, solo fue sostenible a corto plazo. Después de que las medidas sanitarias empezaron a ser flexibilizadas, el promedio diario mensual de casos nuevos se elevó de 10,9 en mayo a 81,1 en junio; sin embargo, el aumento durante esos mismos meses del número de personas ingresadas a cuidados intensivos y fallecidas fue poco significativo (véase el Cuadro 1). Frente al incremento en los contagios, debido a la transmisión comunitaria, las autoridades intentaron restablecer el confinamiento inicial, pero ante las protestas de los empresarios, implementaron la estrategia del martillo y el baile, diseñada por Tomás Pueyo, a partir del 23 de junio del 2020: aperturas en las áreas menos afectadas y controles estrictos donde el Covid-19 se expandía (Recio, 2020a). Además, del 27 de junio en adelante fue obligatorio usar mascarillas en lugares públicos (Rosero, 2020a).

Pronto fue evidente el fracaso de esa política sanitaria: en julio, el promedio diario mensual de casos nuevos ascendió a 463,3, al tiempo que aumentaban los ingresos a cuidados intensivos y las muertes. Todavía no se conoce con precisión el grado en el cual la intensificación de la pandemia en Nicaragua y Panamá afectó a Costa Rica (Henríquez-Márquez, 2021), pero sí está mejor documentado cómo las clases

trabajadoras costarricenses y los inmigrantes pobres nicaragüenses expandieron el Covid-19. A inicios de junio, se detectó un foco de contagio en empresas agrícolas de exportación ubicadas en la zona norte, donde la propagación de la enfermedad estuvo directamente relacionada con las pésimas condiciones laborales y salariales allí predominantes (Cordero, 2020). Poco después un fenómeno similar ocurrió en la ciudad capital (San José), producto del hacinamiento, la informalidad laboral y la miseria (Muñoz, 2020b).

En agosto del 2020, el promedio diario mensual de casos nuevos fue de 757 y estuvo acompañado por un fuerte incremento en los ingresos a cuidados intensivos y en los fallecimientos. A finales de ese mes y de cara a una epidemia que parecía ya incontrolable, el gobierno anunció su última política sanitaria relevante: “Costa Rica trabaja y se cuida”. Aunque las autoridades mantuvieron prohibidas las actividades masivas, cerrados los bares y las discotecas y en vigor mínimas restricciones vehiculares durante la noche, su estrategia –afín al modelo de libre mercado– consistió en responsabilizar a la ciudadanía de su propia salud (Vizcaíno y Córdoba, 2020), una meta fácilmente alcanzable para los grupos oligárquicos y los sectores medios (sobre todo los empleados públicos), pero no para las clases trabajadoras, imposibilitadas de laborar virtualmente.

La liberalización sanitaria se profundizó en las semanas siguientes, cuando el gobierno permitió, con algunas restricciones, la reapertura de bares, gimnasios, casinos, parques nacionales, salas de cine y otros negocios y actividades, el aumento del aforo en las iglesias y la reanudación de vuelos comerciales internacionales; además, extendió el horario en que las playas permanecerían abiertas (Rosero, 2020b; Recio, 2020b; Ávalos y Rescio, 2020). A diferencia de la política implementada de marzo a mayo, las autoridades, como

se observa en la Cuadro 1, eliminaron o flexibilizaron las medidas de contención en septiembre y octubre, cuando el promedio diario mensual de casos nuevos ascendía a 1.126, el de ingresos a cuidados intensivos (servicio que estuvo a punto de colapsar) a 13,5 pacientes y el de muertes a 15,6.

Si en la primera ola pandémica la política sanitaria estuvo dominada por el interés de neutralizar la crisis institucional asociada con el escándalo de la UPAD y mejorar los índices de aprobación, durante la segunda el proceder del gobierno estuvo motivado por reducir a toda costa el desempleo, que alcanzó un 24 por ciento en el segundo trimestre del 2020, descendió a 22 por ciento en el tercero y disminuyó a 20 por ciento en el cuarto (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021a). Priorizar la reactivación económica en detrimento de la salud tuvo un alto costo humano: un incremento en la mortalidad por Covid-19 en octubre que fue uno de los más altos de Iberoamérica (Rosero, 2020b); además, tal enfermedad se convirtió en la principal causa de muerte en el país en el 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021b).

De noviembre en adelante, el número de contagios disminuyó: el promedio diario mensual de casos nuevos bajó de 988,9 en ese mes a 379,5 en febrero del 2021 (véase el Cuadro 1), una tendencia acorde con el curso global de la pandemia (World Health Organization, 2021). De las hipótesis que explicarían tal reducción, la más verosímil es que la mayoría de la población adoptó medidas preventivas (especialmente el uso de la mascarilla y el lavado de manos) que redujeron la propagación del virus (Ávalos, 2021). No es probable que a este resultado contribuyera la vacunación: iniciada a finales de diciembre del 2020, al 29 de marzo del 2021 160.263 costarricenses habían recibido las dos dosis de Pfizer-BioNTech, para una tasa de 3,1 personas por 100

habitantes (Rodríguez, 2021a). En contraste, en ese descenso sí pudo incidir que, en el contexto de una incipiente reactivación económica, personas de clase trabajadora, quienes laboran en la informalidad, los que lo hacen por cuenta propia y microempresarios, ante posibles síntomas de Covid-19, optaran no aplicarse la prueba para no comprometer sus empleos o sus negocios (Montero, 2021).

En marzo del 2021, por vez primera desde septiembre del 2020, el promedio diario mensual de nuevos contagios volvió a aumentar (401,3), seguido por un incremento en las personas internadas en cuidados intensivos, pero no de muertes. Se desconoce aún en qué medida esta modificación en la tendencia está relacionada con el retorno parcial a clases presenciales en escuelas y colegios públicos a partir del 8 de febrero (Cordero, 2021a) o con la presencia de nuevas variantes del virus en el país: la del Reino Unido y la de Sudáfrica, localizadas a finales de ese mismo mes (Rodríguez, 2021b).

Los datos preliminares de abril (un promedio diario mensual de 679,1 nuevos contagios), muy próximos a los de agosto del 2020 (véase el Cuadro 1), indican que una tercera ola ha iniciado. Su crecimiento podría ser acelerado por la circulación de la mutación brasileña recientemente detectada (Cordero, 2021b) y por la reapertura gradual de las fronteras terrestres (Rodríguez, 2021c). Frente a este desafío, la respuesta del gobierno ha sido intensificar la vacunación: una tasa de 6,6 personas por 100 habitantes con el esquema completo al 12 de abril del 2021 (Caja Costarricense de Seguro Social, 2021). La efectividad de tal estrategia depende de que se puedan importar las dosis necesarias a tiempo y de que la resistencia de la población (inclusive personal médico) a aplicárselas, de momento mínima, no se expanda (Loaiza, 2021).

Rechazar la vacuna no se explicaría únicamente por la desinformación y las noticias falsas que circulan al respecto, sino por el creciente descontento y la cada vez más profunda desconfianza con el gobierno, cuyas evaluaciones favorables en el 2020 disminuyeron de 65 por ciento en abril a 26 por ciento en agosto y a 15 por ciento en noviembre (Alfaro, 2020b). Aunque decisivo en neutralizar la crisis de la UPAD, el éxito del esfuerzo nacional contra la pandemia fue de corta duración, por dos razones principales. La primera consistió en que las medidas sanitarias y su impacto evidenciaron las vastas desigualdades de la sociedad costarricense, principalmente en términos de clase, pero también según género, etnia, edad y espacio geográfico. La virtualización del trabajo y del estudio quedó fuera del alcance de los más pobres, incluidos indígenas y afrodescendientes, muchos asentados en áreas rurales o en asentamientos marginales urbanos, sin Internet o con un acceso parcial a ese servicio (Programa Estado de la Nación, 2020). En el caso del desempleo, el femenino superó ampliamente al masculino, al ascender, en el cuarto trimestre del 2020, a 16,4 por ciento para los hombres y a 25,2 por ciento para las mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021a).

La segunda razón fue que el gobierno, en vez de tratar de atenuar las desigualdades, hizo todo lo posible por profundizarlas, al impulsar cuatro proyectos controversiales a partir de mayo del 2020: una reforma para establecer una jornada laboral de doce horas (cuatro días de trabajo y tres de descanso) que elimina el pago de horas extra (50 por ciento más caras) (Díaz, 2020b); un proyecto que, al precarizar los derechos y disminuir los salarios de los empleados públicos, los acerca a las condiciones predominantes en el sector privado (Córdoba, 2021); un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de

dólares, pese a que el Banco Central de Costa Rica tiene reservas superiores a los 8.000 millones de dólares (Núñez, 2020b); y nuevos impuestos, que recaerían principalmente sobre las clases trabajadoras y los sectores medios, para respaldar el acuerdo con el FMI (Murillo, 2020b).

De mayo a agosto del 2020, las protestas contra los proyectos del gobierno tuvieron poco impacto, pero en septiembre el Movimiento Rescate Nacional (MRN), de base comunal y compuesto principalmente por pequeños y medianos patronos y trabajadores por cuenta propia, empezó a liderar el bloqueo de vías públicas (Cordero, Barahona y Sibaja, 2020). Aunque fue inmediatamente criminalizado, MRN se fortaleció en octubre: su oposición a los nuevos impuestos reactivó la memoria histórica de las luchas contra el FMI, libradas en las décadas de 1980 y 1990. Frente a la desobediencia civil, los grupos oligárquicos se dividieron: un sector apoyó la línea dura de las autoridades de no dialogar con los dirigentes de MRN y otro comenzó a negociar con ellos, proceso al que se sumaron algunos diputados de distintos partidos políticos (Alfaro, 2020b).

Presionado por la fuerza adquirida por el MRN y la división de los sectores oligárquicos, el gobierno convocó a un diálogo nacional a finales de octubre, en el que participaron sindicatos, empresarios y otros sectores sociales, pero no el MRN. Tal iniciativa tuvo tres resultados principales: desactivó las protestas, atenuó ligeramente las tendencias fiscales más regresivas impulsadas por las autoridades y bloqueó por lo menos temporalmente la posibilidad de que el acuerdo con el FMI pudiera ser utilizado para impulsar la privatización de instituciones públicas (Murillo, 2020c). A diferencia de otros países de América Latina, la aplicación de políticas neoliberales en Costa Rica antes del 2018 fue gradual y limitada, por lo que el Estado mantiene una participación

dominante en los mercados educativo, financiero, de pensiones, de salud, de seguros, de energía, de telecomunicaciones, de agua potable y de fabricación de licores.

En el primer trimestre del 2021, mientras el promedio diario mensual de casos nuevos de Covid-19 descendía, el gobierno abandonó los acuerdos más progresistas pactados en el diálogo nacional y aprovechó la negociación con el FMI para retornar a una línea dura profundamente regresiva en términos fiscales, sociales e institucionales, aunque sin insistir –todavía– en la privatización de entidades públicas. Desmovilizado el MRN, los sindicatos de empleados estatales, los partidos de izquierda y otras organizaciones sociales llamaron a sus bases a protestar en las calles, pero la respuesta, debido a la pandemia, fue mínima (Ugarte, 2021). Por el momento, autoridades y oligarcas avanzan sus posiciones sin una efectiva oposición popular. También tienen a su favor que la Sala Constitucional, la Controlaría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, que hasta inicios del siglo XXI limitaron las iniciativas neoliberales más radicales, ahora las apoyan o no las objetan.



## Epílogo

### Distanciamiento histórico

En contraste con otros países, donde la pandemia originó o fortaleció políticas progresistas, en Costa Rica reforzó las tendencias regresivas que venían desde antes. El Covid-19 se abatió sobre una economía ya golpeada por la reforma fiscal del 2018, que redujo el poder de compra de las clases trabajadoras y los sectores medios, deprimió el mercado interno e incrementó el desempleo. Acorralado por su creciente impopularidad y por la crisis institucional vinculada con la UPAD, el gobierno aprovechó la pandemia para recuperar capital político, al implementar estrictas medidas sanitarias que contuvieron la expansión de la enfermedad de marzo a mayo del 2020, pero a costa de deteriorar todavía más los ingresos de gran parte de los hogares.

Dada la insostenibilidad de esa situación, el gobierno, optó por flexibilizar la política sanitaria y responsabilizar a la población de cuidar su propia salud. El resultado inmediato fue un incremento en los contagios de junio a septiembre, con una tendencia moderada a la disminución de octubre a diciembre, y más acentuada de enero a febrero del 2021. Al neutralizar las protestas sociales por las medidas sanitarias implementadas para su contención, la pandemia se convirtió en una aliada estratégica de las autoridades, que aprovecharon esta ventaja para impulsar nuevas reformas que deterioran todavía más los derechos laborales, reducen

los salarios y aumentan la carga fiscal de las clases trabajadoras y de los sectores medios.

Las dos olas de Covid-19 que el país ha experimentado hasta ahora no fueron producto de circunstancias inherentes a la enfermedad, sino de medidas sanitarias implementadas por razones predominantemente políticas: de marzo a mayo para contrarrestar la impopularidad de las autoridades y la crisis a que condujo el escándalo de la UPAD, y de junio del 2020 a febrero del 2021 para, en ausencia de una estrategia solidaria basada en una fiscalidad progresiva, reactivar la economía y frenar el desempleo.

Desde un inicio de su gestión, el segundo gobierno del PAC priorizó la satisfacción de los intereses oligárquicos; al hacerlo, empezó a construir una Costa Rica que, al enrumbarse hacia una centralización autoritaria del poder en un contexto de creciente desigualdad, se distancia, cada vez más, de aquella que todavía es celebrada por su democracia socialmente progresista. La pandemia, cuya tercera ola empieza a agigantarse impulsada por la profundización de políticas aperturistas, se convirtió en el acelerador más inesperado y eficiente de ese distanciamiento histórico.

## Referencias

- Abbas, M. Z. (2020). Treatment of the novel COVID-19: why Costa Rica's proposal for the creation of a global pooling mechanism deserves serious consideration? *Journal of Law and the Biosciences*, 7 (1): 1-10.
- Aguilar, M. (1989). *Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica 1943-1971*. San José: Editorial Porvenir.
- Alfaro, J. (2019a, mayo 23). Hacienda perdonó ¢194.000 millones con amnistías tributarias: un 94% de lo que recaudó con ellas. *Semanario Universidad*.
- Alfaro, J. (2019b, julio 5). Ministra de Hacienda: "Cualquier intento de salirse de la regla fiscal va a topar con pared". *Semanario Universidad*.
- Alfaro, R. et al. (2020a). *Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica. Abril 2020*. San José: Centro de Investigación y Estudios Políticos.
- Alfaro, R. et al. (2020b). *Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica. Noviembre 2020*. San José: Centro de Investigación y Estudios Políticos.
- Alvarado A. y Martínez G. (2019). De la calle a la mesa. Acciones de protesta y oportunidades políticas en el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018). *Revista de Ciencias Sociales*, 166: 37-54.
- Alvarado, A. et al. (2020). *Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe marzo-julio 2020*. San José: Instituto de Investigaciones Sociales.

- Álvarez, I. (2020). Labor Rights Under Siege in Costa Rica. *NACLA Report on the Americas*, 52 (4): 379-384.
- Artavia, S. (2020, marzo 27). Gobierno anuncia subsidios de ₡200.000 mensuales a 375.000 familias afectadas por crisis del coronavirus. *La Nación*.
- Ávalos, A. (2021, febrero 3). Vertiginosa caída en tasa de contagio de covid-19 intriga a especialistas. *La Nación*.
- Ávalos, A. y Rescio, P. (2020, octubre 5). Nuevo coronavirus: Salud autoriza apertura de bares y casinos mientras país se acerca a las 1.000 muertes por covid-19. *La Nación*.
- Ávalos, A., Lara J. F. y Recio, P. (2020, marzo 6). Nuevo coronavirus Covid-19 llega a Costa Rica: Salud confirma a turista estadounidense como primer caso importado. *La Nación*.
- Banco Central de Costa Rica. (2019). *Memoria anual 2018*. San José: Banco Central de Costa Rica.
- Banco Central de Costa Rica. (2020). *Memoria anual 2019*. San José: Banco Central de Costa Rica.
- Barboza, L. et al. (2021). The Role of Mobility and Sanitary Measures on Covid-19 in Costa Rica, March through July 2020. arXiv:2103.08732v1 [stat.AP].
- Barquero, K. (2020, abril 13). MEP recurre a educación a distancia para no estancar el curso lectivo. *La República*.
- Barrantes, O. y Solano, M. (2020). Comportamiento especial de la pandemia COVID-19 en Costa Rica durante los meses de marzo y abril de 2020 mediante un análisis de autocorrelación espacial. *Posición* 3: 1-17.
- Blanco, R. (2015). Estado y anti estatismo en Costa Rica: luchas políticas y virulencia discursiva: 1982-2014. San José: XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.

- Borges, F. (2017). Costa Rica: la tercera no fue la vencida, fracaso de la reforma fiscal de Luis Guillermo Solís. *Revista de Ciencia Política*, 37 (2): 389-412.
- Caja Costarricense de Seguro Social. (2021, abril 12). Estadísticas de vacunación. San José: Caja Costarricense de Seguro Social.
- Céspedes, J. A. (2020, abril 7). Kölbi habilita navegación gratuita en sitios web de instituciones públicas que almacenan información sobre el covid-19. *La Nación*.
- Céspedes, V. H. and Jiménez, R. (1995). *La pobreza en Costa Rica. Concepto, medición, evolución*, San José: Academia de Centroamérica.
- Chaves, L. F. et al. (2020). Covid-19 Basic Reproduction Number and Assessment of Initial Suppression Policies in Costa Rica. *Mathematical Modelling of Natural Phenomena* 15 (32): 1-13.
- CID/Gallup. (2020). Luis Alberto Monge y Oscar Arias mejores evaluados como presidentes. San José: CID/Gallup.
- CINDE. (2020, mayo 27). 5 Reasons Costa Rica has Latin America's Lowest COVID-19 Mortality Rate. San José: Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones.
- Clark, M. A. (2001). *Gradual Economic Reform in Latin America. The Costa Rican Experience*, Albany: State University of New York Press.
- Cordero, A., Barahona, M. y Sibaja, P. (2020). *Protesta y movilización social en tiempos de pandemia: algunas tendencias, características y preguntas*. San José: FLACSO.
- Cordero, M. (2020, junio 17). Precariedad laboral preparó el terreno para explosión de contagios en la zona norte. *Semanario Universidad*.
- Cordero, M. (2021a, enero 27). ¿Por qué Costa Rica vuelve a las clases presenciales mientras otros países dan marcha atrás? *Semanario Universidad*.

- Cordero, M. (2021b, abril 7). Salud detecta primeros dos casos de SARS-CoV-2 asociados a variante brasileña. *Semanario Universidad*.
- Córdoba, D. (2021, febrero 24). ¿Por qué razones el proyecto de Ley de Empleo Público violenta las autonomías? *Semanario Universidad*.
- Cortés, S. (2018). Entre la esperanza y la desilusión: la izquierda costarricense y la Nicaragua sandinista, 1979-1992, MA. Thesis, University of Costa Rica.
- Cortés, S. (2020) y Sáenz, R. (2020). Voz experta: La protesta social en Costa Rica en tiempos del COVID-19. San José: Instituto de Investigaciones Sociales.
- Díaz, D. y Viales, R. (2020). Centroamérica: neoliberalismo y Covid-19. *Geopolítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio y Poder*, 11: 53-59.
- Díaz, N. (2020a, abril 3). Diputados aprueban entrega de FCL y prometen arreglar la ley del Banco Central después. *Semanario Universidad*.
- Díaz, N. (2020b, julio 15). Diputados avanzan flexibilización de jornadas contra advertencias de inconstitucionalidad. *Semanario Universidad*.
- Donato E. y Rojas, M. (1987). *Sindicatos, política y economía 1972-1986*, San José: Editorial Alma Mater.
- Edelman, M. (1999). *Peasants against Globalization. Rural Movements in Costa Rica*, Stanford: Stanford University Press.
- González, A. y Solís, M. (2001). *Entre el desarraigo y el despojo ...Costa Rica en el fin de siglo*, San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Gudmundson, L. 2018. *Costa Rica después del café. La era cooperativa en la historia y la memoria*, San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia.
- Gutiérrez, R. S. y Gamarra, J. (2020). Intervenciones salubristas adoptadas por la República de Costa Rica du-

- rante la epidemia de la COVID-19. *Revista Cubana de Salud Pública*, 46 (4): 1-18.
- Henríquez-Márquez, K. I. et al. (2021). Prevención e identificación temprana de casos sospechosos COVID-19 en el primer nivel de atención en Centro América. *Atención Primaria*, 53 (1): 115-116.
- Hidalgo, A. (2020, diciembre 30). Tipo de cambio continúa su senda al alza y cierra en su valor máximo del año. *El Financiero*.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). *Encuesta Continua de Empleo al primer trimestre de 2020*. San José: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021a). *Encuesta Continua de Empleo al cuarto trimestre de 2020*. San José: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021b). *Defunciones 2020, el impacto de la enfermedad COVID-19*. San José: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Jiménez, R., Céspedes, V. H. y Arce, G. (2006). La pobreza en Costa Rica 1987-2004. In: Céspedes, V. H. y Jiménez, R. (eds.), *Pobreza en Costa Rica*, San José: Academia de Centroamérica, 59-78.
- Loaiza, V. (2020, marzo 31). 108 vecinos de Curridabat rechazaron vacunarse este Jueves y Viernes Santo. *La Nación*.
- Ministerio de Hacienda. (2016). Hacienda reitera que redoblará esfuerzos para combatir evasión fiscal, San José: Ministerio de Hacienda.
- Molina, I. (2017). Estadísticas de financiamiento, salarios docentes, matrícula, cobertura y graduación en la educación costarricense: una contribución documental (1827-2016). *Cuadernos del Bicentenario*, 1: 1-42.
- Molina, I. (2019, noviembre 20). La invención de los salarios de lujo. *Semanario Universidad*, 27.

- Montero, M. (2021, enero 29). Cuatro causas podrían explicar reducción de contagios COVID-19 en el país. Teletica.
- Mora, G. et al. (2020, marzo 19). Si hay patadas, hay pa'todos. *La Nación*.
- Muñoz, D. (2020b, julio 6). Hambre y desesperación acechan a habitantes de cuarterías en aislamiento. *Semanario Universidad*.
- Muñoz, J. (2020a). Austeridad, ideología comprometida y Asamblea proactiva-particularista en Costa Rica, en 2019. *Revista de Ciencia Política*, 40 (2): 259-285.
- Murillo, A. (2020a, marzo 3). Operativo judicial inédito propina al gobierno de Alvarado su mayor golpe (hasta ahora). *Semanario Universidad*.
- Murillo, A. (2020b, septiembre 23). Alza en impuestos pone cuesta arriba carrera del Gobierno para negociar con el FMI. *Semanario Universidad*.
- Murillo, A. (2020c, noviembre 25). Mesa de diálogo depara 58 acuerdos: lo bueno, lo malo y lo incierto. *Semanario Universidad*.
- Núñez, J. (2020b, octubre 6). Economistas analizan uso de reservas monetarias. *UNA Comunica*.
- Núñez, M. (2020a, diciembre 4). 2019: Costa Rica con más ingresos por tributos, pero una economía contraída. *Semanario Universidad*.
- Oconitrillo, E. (2004). *Cien años de política costarricense 1902-2002. De Ascensión Esquivel a Abel Pacheco*, San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Paus, E. (2005). *Foreign Investment, Development, and Globalization: Can Costa Rica Become Ireland?* New York: Palgrave Macmillan.
- Pérez, H. (2010). *La población de Costa Rica 1750-2000. Una historia experimental*, San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

- Pignataro, A. y Treminio, I. (2019). Reto económico, valores y religión en las elecciones nacionales de Costa Rica (2018). *Revista de Ciencia Política*, 39 (2): 239-264.
- Poder Ejecutivo (2020, febrero 17). N° 41996-MP-MIDEPLAN. Alcance 24 a *La Gaceta*, 31, 2-7.
- Programa Estado de la Nación. (2011). *Decimoséptimo informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*, San José: Programa Estado de la Nación.
- Programa Estado de la Nación. (2015). *Vigésimo primer informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*, San José: Programa Estado de la Nación.
- Programa Estado de la Nación. (2019). *Informe Estado de la Nación 2019*, San José: Servicios Gráficos AC.
- Programa Estado de la Nación. (2020). *Estado de la Nación 2020*. San José: Consejo Nacional de Rectores y Programa Estado de la Nación.
- Ramos, M. (2020). Centroamérica: entre la amenaza del Covid-19 y la realidad de la pobreza y la violencia. *ICEI Papers COVID 19*, 10: 1-4.
- Raventós, C. et al. (2005). *Abstencionistas en Costa Rica. ¿Quiénes son y por qué no votan?* San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Recio, P. (2020a, junio 24). El martillo y el baile: ¿En qué consiste la estrategia que anunció Carlos Alvarado para enfrentar el covid-19? *La Nación*.
- Recio, P. (2020b, septiembre 9). Costa Rica apuesta desde este 9 de setiembre a disciplina individual contra la covid-19. *La Nación*.
- Rodríguez A. et al. (2020). *El aporte de la biotecnología médica frente a la pandemia de COVID-19 y lecciones para su desarrollo mediante las estrategias nacionales de bioeconomía. Estudios de caso de Colombia, Costa Rica y el Uruguay*. Santiago: CEPAL.

- Rodríguez, F. y Morales, R. (2019). Costa Rica: impacto de la implementación del IVA en el gasto de los hogares según decil de ingreso. *Economía & Sociedad*, 24 (56): 47-61.
- Rodríguez, I. (2020, marzo 11). ¿Cómo llegó el covid-19 al médico del Hospital de Alajuela? Ya suman 16 los pacientes con los que tuvo contacto. *La Nación*.
- Rodríguez, I. (2021a, marzo 30). 160.000 costarricenses recibieron vacunación completa contra covid-19. *La Nación*.
- Rodríguez, I. (2021b, febrero 24). Nuevas variantes de coronavirus preocupan en el país: una es más transmisible, la otra escapa a defensas del cuerpo. *La Nación*.
- Rodríguez, I. (2021c, abril 4). Costa Rica comienza este lunes primera fase de apertura de fronteras terrestres al turismo. *La Nación*.
- Rosero, L. (2020a). La tasa R de reproducción del COVID-19. Costa Rica en el contexto de Iberoamérica (Informe de julio 2020). San José: Centro Centroamericano de Población.
- Rosero, L. (2020b). La tasa R del Covid-19 en Costa Rica. (Informe del mes de octubre 2020). San José: Centro Centroamericano de Población.
- Rovira, J. (1982). *Estado y política económica en Costa Rica 1948-1970*, San José: Editorial Porvenir.
- Rovira, J. (1987). *Costa Rica en los años '80*, San José: Editorial Porvenir.
- Salazar, O. and Salazar, J. M. (2010). *Los partidos políticos en Costa Rica 1889-2010*, San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Salom, R. (1987). *La crisis de la izquierda en Costa Rica*, San José: Editorial Porvenir.

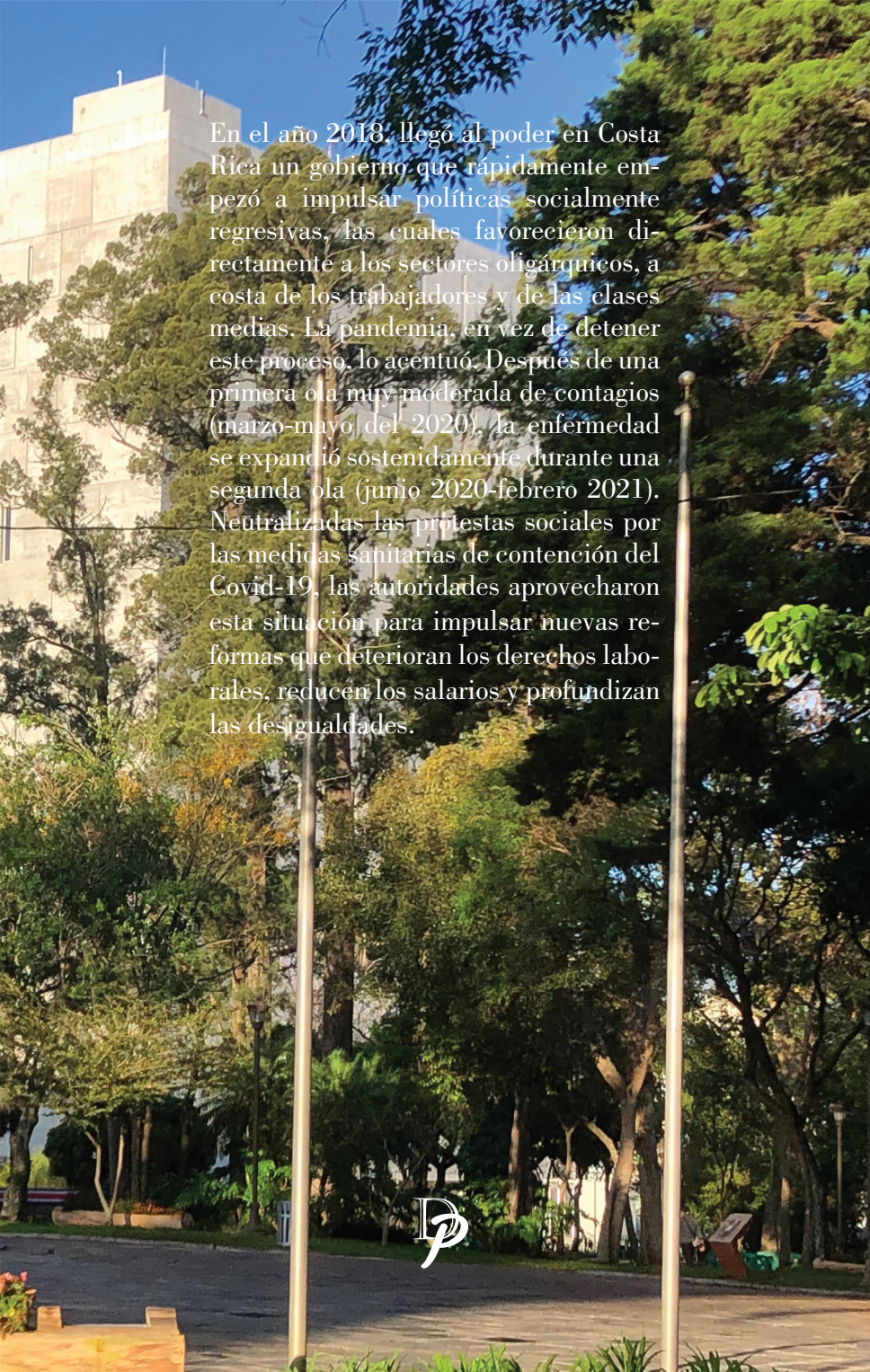
- Sánchez, F. F. (2007). *Partidos políticos, elecciones y lealtades partidarias en Costa Rica: erosión y cambio*, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Semanario Universidad*. (2016, abril 4). Dólares ticos en los paraísos. *Semanario Universidad*.
- Sobrado, M. y Gutiérrez, M. (1982). Costa Rica: indicadores socioeconómicos de la crisis. *Revista de Ciencias Sociales*, 24: 19-32.
- Ugarte, O. (2021, marzo 11). Sindicatos anuncian manifestación en Paseo Colón para este sábado. *Semanario Universidad*.
- Viales, R. y Vargas, J. P. (2020). Costa Rica: entre el cambio y la persistencia. Una historia reciente (1940-2020, antes de la Covid-19). *Cuadernos del Bicentenario*, 15: 1-51.
- Vizcaíno, I. y Córdoba, J. D. (2020, agosto 26). Gobierno pide disciplina a ticos al permitir mayor apertura en setiembre. *La Nación*.
- World Health Organization. (2021). *COVID-19 Weekly Epidemiological Update*. Geneva: World Health Organization.



## Acerca del autor

Iván Molina Jiménez. Costarricense (1961). Catedrático de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica. Autor, coautor o editor de numerosos estudios sobre historia de Costa Rica, en particular, y de Centroamérica, en general. Premio Nacional de Historia (1991), Premio de la Academia de Geografía e Historia (1991), Premio Áncora del periódico *La Nación* (1992), Premio al Investigador en Ciencias Sociales (2015), Premio Luis Ferrero de Investigación Cultural (2016). Entre sus libros más recientes figuran: *Huelgas democratizadoras. La rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (1980-1982)* (San José, CIHAC-EDUPUC, 2019) y *Yolanda Oreamuno: del mundo elegante costarricense a la república internacional de las letras (1916-1956)* (San José, EUNED, 2020). En el género de la ciencia ficción ha publicado varios libros de cuentos cortos y algunos de sus relatos han sido incluidos en recopilaciones y revistas publicadas en México, Colombia, Perú, España, Argentina y Cuba. Su más reciente libro en este campo es: *Las fugitivas de Abidos. Microrrelatos de ciencia ficción* (Heredia, La Jirafa y Yo, 2017). También ha incursionado como productor de cine costarricense.



A photograph of a university campus. In the background, a large, multi-story building with a light-colored facade is visible. The foreground and middle ground are filled with lush green trees and foliage. Two tall, thin poles stand in the foreground. The overall scene is bright and sunny, suggesting a clear day.

En el año 2018, llegó al poder en Costa Rica un gobierno que rápidamente empezó a impulsar políticas socialmente regresivas, las cuales favorecieron directamente a los sectores oligárquicos, a costa de los trabajadores y de las clases medias. La pandemia, en vez de detener este proceso, lo acentuó. Después de una primera ola muy moderada de contagios (marzo-mayo del 2020), la enfermedad se expandió sostenidamente durante una segunda ola (junio 2020-febrero 2021). Neutralizadas las protestas sociales por las medidas sanitarias de contención del Covid-19, las autoridades aprovecharon esta situación para impulsar nuevas reformas que deterioran los derechos laborales, reducen los salarios y profundizan las desigualdades.

